



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

Sentencia TFABA

Número:

Referencia: "FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A." 2360-0356688/2011

AUTOS Y VISTOS: el expediente número 2360-0356688/2011 caratulado "FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A."

Y RESULTANDO: Que a fojas 2/25 del Alcance N° 2 que corre agregado como fojas 540 de las presentes actuaciones, el Dr. Emilio Sarmiento en carácter de apoderado y patrocinante de la firma "FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A." y el Sr. Héctor Miguel Di Doménico, por su propio derecho, con el patrocinio del citado profesional, interponen Recurso de Apelación contra la Disposición Delegada SEFSC N° 5330, dictada por la Gerencia de Operaciones Area Interior de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 15 de Diciembre de 2014.

Que mediante la citada Disposición, obrante a fojas 517/536, se determinan las obligaciones fiscales de la firma "FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A.", CUIT 30-68133504-4, en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen General de Percepción- correspondientes al año 2009. Por su artículo 3°, se establece el monto de las percepciones omitidas por no haber actuado en la calidad referenciada, que totalizan la suma de Pesos un millón ciento ocho mil ciento treinta y uno con veintidós centavos (\$ 1.108.131,22) con más los accesorios del artículo 96 del Código Fiscal (Ley N° 10.397, T.O. 2011 concordantes de años anteriores y modificatorias).

Por su artículo 4°, se aplica una multa equivalente al treinta por ciento (30%) del monto del gravamen omitido, por haberse constatado la infracción prevista en el artículo 61, segundo párrafo y recargos equivalentes al sesenta por ciento (60%) del

monto del impuesto no percibido con más los accesorios de ley, atento a lo normado por el artículo 59 inciso f) del citado Cuerpo Legal (artículo 6°).

Por último, por su artículo 8° se declara la responsabilidad solidaria e ilimitada por el pago de los gravámenes, sanciones e intereses, del Sr. Héctor M. Di Doménico, atento a lo normado por los artículos 21, 24 y 63 del citado plexo fiscal.

A fojas 548 se elevan los autos a este Tribunal y a fojas 550 se deja constancia de la adjudicación de la causa para su instrucción a la Vocalía de la 7ma. Nominación, quedando radicada en la Sala 3ra.

A fojas 557, se da traslado del Recurso de Apelación articulado a la Representación Fiscal por el término de quince (15) días, con remisión de las actuaciones, para que conteste agravios y en su caso oponga excepciones (artículo 122 del Código Fiscal), obrando su alegato a fojas 558/566.

A fs. 576 se hace saber que el Dr. Ángel Carlos Carballal asume la condición de subrogante de la vocalía de 7ma. Nominación. Se ordena asimismo, como medida para mejor proveer, la remisión de las actuaciones al Departamento de Representación Fiscal a efectos de que corrobore y verifique en su base de datos, si los contribuyentes involucrados en el ajuste como clientes de la firma de autos, han presentado sus declaraciones juradas y pagado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de las posiciones enero a diciembre de 2009, obrando a fs. 577/607 la pertinente contestación.

Finalmente, a fojas xxxx se deja constancia de la integración final de la Sala en tanto el Dr. Jorge Saverio Matinata fue designado en carácter de Conjuez (conforme Acuerdo Ordinario N.º 61/23), habida cuenta la vacancia de la Vocalía de la 8va. Nominación, se tiene por cumplida la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 576, se tiene por constituido nuevo domicilio procesa y se provee la prueba ofrecida, se tiene por agregada la documental, desestimándose la informativa y la pericial ofrecidas, por innecesarias para la resolución de la causa. Asimismo, en atención al estado de las actuaciones, se llama "Autos para Sentencia" (artículos 126 del Código Fiscal t.o. 2011).

CONSIDERANDO: I.- Mediante el recurso de apelación interpuesto, el recurrente comienza su relato haciendo un análisis de la Disposición apelada.

Como primera cuestión, opone la excepción de prescripción de las facultades del Fisco en virtud de lo dispuesto por los artículos 4027 inc. 3) del Código Civil y 157 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Afirma que la presente defensa de prescripción debe ser juzgada a la luz de los

preceptos del Código Civil, por lo que requiere la declaración de inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal. Cita caso "Filcrosa S.A.", entre otros; doctrina y artículos 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

Entiende, por lo dicho, que los períodos 01 a 12/2009 se tornaron exigibles a partir de su vencimiento al mes siguiente de cada período, y que, al no existir causales de interrupción o suspensión por no haber sido notificada la resolución de determinación de oficio hasta el 17/12/2014, el único período vigente es 12/09.

En otro punto de expresión de agravios manifiesta que, solicitaron a ARBA un especial tratamiento respecto del período probatorio, instando la acumulación de los seis (6) expedientes abiertos por resultar de imposible cumplimiento el diligenciamiento de los oficios en el exiguo plazo de 10 días, lo que fue denegado, autorizando la prueba conjunta de tan sólo dos (2) de los expedientes: el 2360-356685/2011 y el 2360-363436/2011.

Expresa que no ha discutido su omisión de haber actuado como Agente de Percepción, sin perjuicio de lo cual disiente con la calidad y cantidad de sanciones aplicadas, con el método de cómputo, con la negativa a computar las notas de crédito y con la particularidad de exigir al Agente de marras el ingreso de un tributo cuando el contribuyente directo ya ha ingresado el mismo. Respecto de lo último manifestado indica que, si se negase la posibilidad de demostrar la existencia del ingreso por parte de los contribuyentes directos, el Fisco se vería beneficiado con un doble ingreso, dando lugar al enriquecimiento sin causa del mismo.

Refuta que la inspección utiliza en toda la determinación el método de lo "devengado" sobre un Agente que no ha sido inscripto como Agente de Percepción y que tampoco ha declarado el método por el que optaba actuar. Asimismo, impugna la decisión de ARBA de excluir del ajuste las notas de crédito que fueran acompañadas al expediente administrativo en virtud de no poder ser comprobada la factura respectiva que anula, como también la aplicación del Informe N° 34/2008 de la DDT, por lo que solicita su detracción. Entiende que en el caso no se efectuó la percepción con lo cual el citado informe no resulta aplicable y lo que se pretende es que no se dupliquen los montos de percepciones determinadas con facturas que han sido anuladas.

Solicita una nueva liquidación detrayendo de las facturas "B" emitidas el débito fiscal correspondiente, a los efectos de aplicar la alícuota de percepción, según lo establecido por el artículo 188 del Código Fiscal. Considera que es un error incluir el IVA para calcular la base imponible de las operaciones celebradas con monotributistas.

En torno a la aplicación de la multa infiere que para que un sujeto contribuyente resulte condenado no basta que se verifique el incumplimiento objetivo o material de la norma respectiva, siendo necesaria la presencia del elemento subjetivo evidenciada o través de un actuar culposo o doloso, el cual debe ser demostrado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Entiende, respecto a la solidaridad endilgada, que es absolutamente ilegítimo e improcedente responsabilizar de manera automática u objetiva por el solo hecho de ejercer una función en la persona jurídica sin analizar la actuación personal del imputado y de los socios respecto a las supuestas obligaciones incumplidas. Considera que se trata de una responsabilidad solidaria, por lo que corresponde admitir su procedencia con carácter restrictivo. Cita artículo 157 de la Ley de Sociedades y jurisprudencia (Caso "Raso, Francisco. Sucesión y otros. Apremio"). Finalmente solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 21 del Código Fiscal, revocando la resolución en este aspecto.

Respecto a la aplicación de recargos expone que tanto la doctrina como la jurisprudencia han concluido que los mismos tienen naturaleza penal. Asimismo plantea que el Código Fiscal no prevé la posibilidad de que el sujeto pasivo tributario (imputado) pueda probar su inocencia, vulnerando las garantías constitucionales. Cita jurisprudencia y declara la violación al principio non bis in idem al aplicar los recargos conjuntamente con la multa por defraudación y la multa por omisión. Rechaza la extensión de responsabilidad de los recargos a los integrantes del órgano de administración, artículo 63 del Código de marras, encontrando limitada su aplicación a las sanciones de los artículos 60, 61 y 62 del mencionado texto legal, no así el supuesto del artículo 59.

Ofrece prueba documental, informativa y pericial. Solicita beneficio de litigar sin gastos, conforme artículos 78 y ss. del C.P.C.C.B.A. Hace reserva del Caso Federal.

II.- A su turno, la Representación Fiscal, comienza su relato, y en cuanto al planteo de prescripción opuesto, adelanta que las actuales disposiciones del Nuevo Código Civil y Comercial, en especial el artículo 2532, confirman la postura asumida por la Agencia, como una potestad no delegada por las provincias al Congreso Nacional, que debe ser regulada de manera excluyente por el derecho local. Al ser el Código Fiscal un ordenamiento de derecho sustantivo, resulta lógico que su regulación revista una de las facultades no delegadas por las provincias al Estado Nacional. Considera que las circunstancias descriptas, en manera alguna se oponen a la supremacía de las leyes nacionales prevista por el artículo 31 de la Constitución Nacional, desde que no vulneran garantías reconocidas por la Carta Magna, sino que se trata de facultades ejercidas por las Provincias en uso del poder reservado (arts. 104 y 105 de la Constitución Nacional). Cita Jurisprudencia.

Pone de resalto que, en materia de prescripción, devienen aplicables los artículos 157 y 159 del Código Fiscal que prevén un plazo de cinco años de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales, comenzando a correr su cómputo desde el 1° de enero siguiente al año al que se refieren las mismas, siendo en el caso de los Agentes de Recaudación, el 1° de enero del año siguiente al vencimiento que las normas prevén para el ingreso de los importes omitidos de recaudar.

En el particular, describe que el cómputo a los efectos de establecer la alegada prescripción comenzó a correr el 1° de Enero de 2010, para el período fiscal 2009, el cual se encontraba suspendido desde la fecha de intimación de pago del tributo operada con la notificación de la Disposición Delegada de marras que contiene la intimación al pago, practicada el 17 de Diciembre de 2014 (fojas 537), hasta los 90 días posteriores a que la Autoridad de Aplicación reciba las actuaciones en el marco de las cuales el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia declarando su incompetencia, determinando el tributo, aprobando la liquidación practicada en su consecuencia o, en su caso, rechazando el recurso presentado contra la determinación de oficio. Cita jurisprudencia.

En torno a las inconstitucionalidades solicitadas, destaca que debe estarse a la expresa prohibición de su dictado en esta instancia por disposición del artículo 12 del Código Fiscal.

En relación al pedido de unificación de los expedientes de la Firma, remite a lo expedido a fojas 526 por el a quo, ratificándolo en esta oportunidad, destacando que resultaría procedimentalmente más dificultosa en virtud del universo de clientes involucrados y respecto de los cuales giran las pruebas ofrecidas.

Conteste a los apelantes y a fin de arribar al ajuste cuestionado, existiendo hechos controvertidos, destaca que se dictó la Apertura a Prueba, remitiendo a lo dicho a fojas 524 vta. y sgtes.; 525 vta., 527 vta., para concluir que no se ha acreditado totalmente el efectivo ingreso del tributo reclamado por los contribuyentes directos y siendo suya la carga de la prueba, han actuado negligentemente respecto de la producción de la pericia contable y de la prueba informativa.

En lo que respecta al cuestionamiento formulado en torno al método de lo devengado remite a lo expuesto por el a quo a fojas 528 y sgtes, observando que el apelante optó, al momento de la inscripción, por dicho método. Concluye, entonces que se trata de una disconformidad con el método aplicado sin ofrecer prueba que establezca el monto de las percepciones reclamadas siguiendo el método de lo percibido.

Refiere a las quejas relacionadas con las notas de crédito y el monto de las operaciones celebradas con monotributistas precisando que el monto sobre el cual debe practicar el Agente las percepciones se ha determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 342 de la Disposición Normativa Serie "B" N° 01/2004 y el tratamiento otorgado a las notas de crédito se ha realizado en concordancia con la Resolución Normativa N° 10/2008.

Puntualiza que el apelante no ha arrimado prueba útil que avale su postura, por lo que su defensa se ciñe a manifestar sólo una discrepancia subjetiva con el ajuste efectuado.

Considera que, probada la falta de percepción resulta procedente la aplicación de la sanción impugnada. Cita artículo 61, segundo párrafo del Código de marras, Acuerdo Plenario N° 20/09 y Jurisprudencia. Rechaza el planteo relacionado a la inaplicabilidad de los recargos en tanto los mismos constituyen una medida accesorio de la obligación del agente - en el caso retener el tributo - no cumple una finalidad represiva o aflictiva que autorice a equiparlo a las sanciones, no tiene las características de una pena fiscal, pero resarce al fisco el ingreso extemporáneo de la obligación. Aclara que la Agencia no gradúa los mismos ni evalúa la conducta del Agente para su aplicación, como es el caso de las sanciones, se hallan establecidos en relación a la demora por el legislador. En lo atinente a los agravios referidos a la responsabilidad solidaria endilgada, sostiene que la agencia ha circunscripto su accionar a la normativa vigente (artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal). Alega que el instituto se encuentra en cabeza de quienes, si bien no resultan obligados directos del impuesto, como sujetos pasivos del tributo, por la especial calidad que revisten o la posición o situación especial que ocupan, la ley los coloca al lado del contribuyente, pudiendo reclamarles la totalidad del impuesto adeudado de manera independiente a aquel. No se trata de una responsabilidad subsidiaria ni procede el beneficio de excusión. Se trata de una obligación a título propio por deuda ajena.

Soslaya que los responsables son deudores solidarios e ilimitados, motivo por el cual la Agencia tiene la facultad de demandar la totalidad de los gravámenes, multa y accesorios a cualquiera de los deudores u obligados o a todos conjuntamente, quedando entre ellos subyacente su derecho a repetirse los montos abonados.

En torno a la insinuación de la inaplicabilidad del régimen de responsabilidad solidaria, por la supuesta declaración de inconstitucionalidad de las normas del decisorio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Raso, Francisco. Sucesión y otro s/ Apremio", señala que la SCJBA no ha conformado mayoría de votos en el citado fallo para pronunciarse en el sentido indicado por los presentantes. Así la mayoría no declaró la inconstitucionalidad de la norma sino que compartió la resolución del fallo que ha

sido la de rechazar el recurso, pero por otros argumentos, sin decir nada respecto de la inconstitucionalidad. Cita jurisprudencia.

Por lo expuesto solicita se desestimen los agravios traídos y se tenga presente el Caso Federal para el momento procesal oportuno.

III.- VOTO DEL DR. ÁNGEL C. CARBALLAL: En atención a los planteos de la parte apelante, se debe decidir si se ajusta a derecho la Disposición N° 5330/14, dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y es en este sentido que comenzaré por dar respuesta a los agravios impetrados.

1) Con relación a la prescripción invocada, suerte adversa corresponde predicar a la defensa de la parte. La apelante alega que en el presente se deben aplicar los preceptos del Código Civil, por resultar una norma de rango superior, deviniendo inconstitucionales los artículos 159, 160 y 161 del Código Fiscal.

Al respecto, y contrariamente a lo esbozado por el quejoso, considero que dicho planteo deviene abstracto en autos, ya que si la temática debe dirimirse a la luz de lo prescripto por los artículos del Código Fiscal, la prescripción no ha operado, por los fundamentos que expone en autos la Representante del Fisco.

Ahora bien, tendríamos que llegar a idéntica conclusión, si siguiéramos el complejo de antecedentes jurisprudenciales traídos, con particular referencia a cada uno de los argumentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia a partir del caso "Filcrosa", y su alcance, doctrina reiterada en decisiones posteriores (Fallos: 327-3187; 332-616 y 2250, entre otras); y asumida por la Suprema Corte bonaerense, a partir del pronunciamiento en autos "Fisco de la Provincia de Bs As. Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Lda. Concurso preventivo" (C. 81.253).

Decididamente me resulta refractaria tal solución. Ello así, entre muchos otros motivos, por la gran desvirtuación arriesgada bajo el entonces vigente Código Civil, para el que sería decenal el plazo de prescripción para los Impuestos de Sellos y a la Transmisión Gratuita de Bienes (arts. 4023 y concordantes del CC).

Pero yendo a lo que aquí interesa, debe recordarse que el mismo criterio (prescripción decenal - art. 4023 del C.C.) ha sido aplicado por la jurisprudencia en relación con la determinación de las obligaciones del agente de recaudación (conforme Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mareque Jesús s/ Apremio Provincial", sentencia del 16.09.2008).

Y ello sin entrar a analizar el efecto suspensivo por un año que bajo el artículo 3986

del entonces vigente Código Civil, entraña la notificación de la Vista de Diferencias de fs. 365/370, diligencia efectivizada el 29 de noviembre de 2013 (conforme C.S., Sentencia del 21 de junio de 2018 en Autos: “Banco de la Nación Argentina c/ GCBA –AGIP DGR— resol. 389/09 y otros s/ proceso de conocimiento”).

Asimismo, posteriormente, el efecto que en el marco de la dispensa propuesta por el artículo 3980 del C.C. (actual artículo 2550 del C.C. y C.U.) genera la imposibilidad asumida por el Fisco de ejecutar su crédito, a raíz de la suspensión de la obligación de pago provocada por la interposición del recurso bajo tratamiento, con fecha 8 de enero de 2015 (ver fs. 2 del Alcance que corre agregado a fojas 540).

En definitiva, es opinión de este Vocal, que la defensa de prescripción intentada no puede prosperar, lo que así declaro.

2) Adentrándome al análisis sobre las cuestiones de fondo introducidas, comenzaré con la imputación de omisión de percepción, en el entendimiento que el peso en estas actuaciones está relacionado en este extremo, con la carga probatoria en materia de ingreso del impuesto por parte de los contribuyentes directos.

Que, se encuentra fuera de debate, al no haber sido objeto de agravio por la apelante, su condición de agente de percepción durante el período fiscalizado (artículos 21 inciso 4, 94, 202 y 203 del Código Fiscal; Libro Primero, Título V, Capítulo IV Sección I y II de la Disposición Normativa Serie B N° 1/2004, sus modificatorias y complementarias), así como la omisión total de actuación durante el mismo. Todo esto incluso ya ha sido analizado y pormenorizadamente fundado por la fiscalización actuante y el juez administrativo en los considerandos del acto ahora apelado.

Dicho lo que antecede, el argumento de defensa aquí presentado se relaciona con la inexistencia de obligación ya que, si bien acepta el presentante que se omitió percibir, los contribuyentes directos involucrados en las operaciones de compra efectuadas al agente de autos, sus clientes, habrían pagado por se el tributo en cada uno de los anticipos en los que no fueron “percibidos”.

En relación a estas manifestaciones, corresponde recordar que, a fin de eximirse de aquella responsabilidad, es carga principal del propio agente demostrar el pago del tributo en tiempo oportuno por parte de cada contribuyente directo. La obligación del Agente nace en el momento en que se produce el hecho previsto por la norma tributaria debiendo efectuar entonces, la detracción o la adición del impuesto. El nacimiento de la relación jurídica, acaecido por la realización del hecho previsto en la normativa fiscal, importa el origen de la obligación, integrada por el deber de satisfacer el gravamen con la consiguiente responsabilidad potencial por el

incumplimiento (conf. Osvaldo Soler “Derecho Tributario. Económico. Constitucional. Sustancial. Administrativo Penal”. Ed. “La Ley” Ed. 2002 Pág. 193). En esa misma línea *“...la carga que el ordenamiento jurídico pone en cabeza del agente de retención se vincula con el sistema de percepción de los tributos en la misma fuente y atiende a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria, pues aquél que es responsable del ingreso del tributo, queda sometido a consecuencias de naturaleza patrimonial y represivas en caso de incumplimiento de sus deberes y, puede ser dispensado de su obligación solo si acredita que el contribuyente ingresó esa suma (Fallos:308:442; 327:1753 y sus citas)...”* (CS, sentencia del 27 de octubre de 2015, en autos "San Juan S.A. (TF 29.974-1) cf DGI").

Siendo entonces una obligación sustantiva la que alcanza a estos sujetos, de lo hasta aquí dicho se desprende además que, el conocimiento de los plazos para realizar el depósito de lo recaudado es obligación específica del agente de percepción, así como la de actuar en los casos, formas y condiciones, contemplados en la normativa aplicable (B. 63.519 "Safontas de Schmidt, Susana c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda Contencioso Administrativa").

Aclarado entonces que la cuestión se desplaza a un problema de hecho y prueba, me permito analizar el mentado Informe Técnico N° 208/2016, que en sus párrafos se pronuncia señalando que *“...la cuestión planteada acerca de los extremos que deberían acreditarse...es una cuestión de prueba cuya evaluación le corresponde a la dependencia consultante en el marco de los procedimientos que se lleven a cabo. En este sentido no es posible realizar una enumeración taxativa de las pruebas idóneas sino que su aptitud estará dada por la adecuación de los extremos alegados y aportados con respecto de la finalidad perseguida...”*. Luego se aboca, en lo que atañe al Régimen de Percepción, advirtiendo que la acreditación del cumplimiento por parte del contribuyente directo debe girar en torno a la demostración: *“... que la compra del bien de que se trata se encuentra registrada en los libros de IVA o en los registros contables llevados en legal forma; luego que el contribuyente no se tomó la percepción y que pagó el impuesto, todo ello con respecto al anticipo en el que correspondía detracer la percepción...”*.

Analizando lo expuesto cabe advertir como primer elemento diferenciador de análisis, la distinta situación que se presenta en la omisión de agentes de retención respecto de los agentes de percepción. En el caso de los primeros, el retentor, es un deudor del contribuyente, o alguien que, por su función, la actividad, oficio o profesión, se halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad de aquel, ante lo cual amputa la parte que corresponde al fisco en concepto de tributo. Hablamos aquí sustantivamente de un proveedor del agente ejerciendo su actividad habitual y a título oneroso (venta, prestación) y por ende un hecho imponible

verificado que genera un ingreso gravado por el impuesto. De hecho, el agente de retención se queda con el monto del impuesto que le correspondería a su proveedor ingresar como impuesto propio. Así, el Fisco unifica el control y mientras los proveedores harán oportunamente, la deducción de la retención.

En cambio, el agente de percepción (como la firma de marras) es un acreedor del contribuyente, o alguien que por su función, actividad, oficio o profesión, está en una situación tal que le permite recibir de aquel un monto tributario que posteriormente debe depositar a la orden del Fisco. Ya no hablamos de un proveedor del agente sino de un cliente de él, quien le compra o recibe su prestación sin que este hecho o situación se encuentre directamente relacionada con el hecho imponible del tributo, ni con ingresos gravados del eventual contribuyente, quien quizás se encuentra adquiriendo insumos para su proceso productivo, por ejemplo. Así, el día que le corresponda a este cliente declarar e ingresar el impuesto, detraerá las percepciones que haya sufrido.

Como vemos, al lado del obligado por deuda propia (proveedores o clientes), existen otras personas que están obligadas al pago del impuesto por decisión expresa de la ley y su reglamentación. Son responsables solidarios de esas obligaciones, porque el legislador quiere ampliar la esfera subjetiva de los obligados, a efectos de garantizar el cobro del impuesto. Consecuentemente, como ocurre ante cualquier supuesto de responsabilidad solidaria, el pago de la obligación por cualquiera de los sujetos pasivos involucrados libera a los demás, extinguiendo también su propia obligación. Y, si bien al analizar una omisión por parte de un agente de retención, la cuestión probatoria se vuelve algo más compleja, al resultar necesario acreditar la debida facturación y registración de la operación involucrada, en pos de poder auditar que el ingreso generado ha sido objeto de la eventual autoliquidación y pago por el contribuyente no retenido, este extremo no se verifica cuando el omisor es un agente de percepción, en tanto su régimen no comparte como ya se expuso, las mismas características que un régimen de retención. En este último supuesto, basta con acreditar el “debido” ingreso del impuesto “debido”, para que la solidaridad que alcanza al perceptor que omitió, se extinga.

Volviendo al análisis del caso de autos, que el principio general, aplicable al caso coloque la carga probatoria en cabeza del agente omisor, no puede llevar ciegamente a impedir otras medidas (enmarcadas en el impulso de oficio y la verdad material) que pueden efectivizarse bajo la noción que conceptualiza la “teoría de las cargas dinámicas de la prueba”, siendo insoslayable que la Autoridad de Aplicación cuenta en sus registros con la información necesaria para acreditar el pago del impuesto por parte de los clientes del agente de percepción de marras. El obrar fiscal generaría, ignorando sus propias registraciones, un riesgo cierto de producir un

enriquecimiento sin causa en favor del Fisco, dejando pasar la oportunidad de evitar la duplicidad de pago de una misma obligación por sujetos pasivos distintos (agente y contribuyente).

En torno a ello, ya ha expresado la Sala II de este Cuerpo: *“...estimo importante mencionar que, a diferencia de lo que dispone la legislación nacional en el tema - inciso c) del art. 8 de la Ley 11.683, bien que limitado a retenciones omitidas- en el ámbito local el legislador no ha previsto en forma expresa la causal aquí esgrimida (pago del gravamen por el sujeto obligado en forma directa) a efectos de exonerarse del reclamo de la porción de impuesto no recaudado, omisión que —vale aclarar desde el inicio- no impide que el juzgador analice dicha posibilidad bajo la línea argumental que trasunta el recurso, ni bien se repara que la misma reposa —en definitiva- en elementales principios generales del derecho que hacen a la buena fe que debe primar entre las partes y que, en la especie, está constituido por la denominada teoría del enriquecimiento sin causa -un bien de un sujeto (en el caso, el Fisco persiguiendo al Agente el monto del impuesto) respecto del cual ya se ha visto satisfecho por parte del contribuyente, no percibido, en ocasión de cumplir con sus propias obligaciones...”* (del Voto del Dr. Lapine en autos “Muresco S.A.”; Sentencia del 2/8/2018, Registro N° 2689).

No altera lo dicho, cualquier especulación que pueda hacerse sobre eventuales maniobras fraudulentas por parte de los clientes de la empresa si se tomaran estas percepciones omitidas, extremo que podría disparar acciones fiscales, infraccionales y hasta penales sobre los mismos, mas no sobre la empresa de autos, mucho menos como fundamento para exigirle el pago de este impuesto.

Por ello, y siguiendo a Jorge W. Peyrano en que *“...el esquema de un proceso moderno debe necesariamente estar impregnado por el propósito de ajustarse lo más posible a las circunstancias del caso, evitando incurrir en abstracciones desconectadas de la realidad...”* ([fundesi.com.ar/la-carga dinámica de la prueba y los- Fundación de Estudios Superiores e Investigación - FUNDESI - 5 febrero, 2016](http://fundesi.com.ar/la-carga-dinamica-de-la-prueba-y-los-fundamentos-de-la-prueba)), se consideró razonable requerir a la propia Agencia de Recaudación, informe sobre la presentación de declaración jurada y pago por los clientes auditados de la firma.

A esta altura, es necesario advertir que dadas las características propias de un régimen (general o especial) de percepción, no puede realizarse en la instancia un seguimiento de un bien o servicio en el marco de determinada actividad, ya que involucra la adquisición de insumos o bienes que pierden identidad en una posterior etapa de transformación o prestación de servicios llevada a cabo por el contribuyente. Es por ello que el hecho de acreditarse la registración de las compras en la contabilidad del contribuyente “no percibido”, da cuenta de la inserción de tales adquisiciones en su operatoria y, por ende, en la eventual actividad generadora del

hecho imponible del impuesto. Las registraciones en cuestión carecen de mayor trascendencia que la descripta. Sobre todo si están acreditados los pagos del impuesto del período por parte de estos obligados por deuda propia, extremo documentado por el apelante y constatado con los registros informáticos de la propia Agencia de Recaudación.

De lo dicho precedentemente, y en el marco de la medida para mejor proveer dictada por esta Instrucción se entiende procedente liberar de responsabilidad al apelante, por el pago de las percepciones que se constataron omitidas con respecto a los clientes que presentaran declaración jurada y abonaran el impuesto de corresponderles, de acuerdo con el informe de fs. 592/607, así como de los accesorios y recargos que se aplicaran por tales omisiones, siguiendo los mismos criterios y fundamentos expresados en mi voto en autos "XEROX ARGENTINA ICSA", Registro N° 2277, reiterado en autos "BOLDT S.A.", Registro N° 2275, ambas Sentencias de la Sala I, de fecha 2 de marzo de 2021, entre otras, a las cuales remito brevitatis causae; lo que así voto.

Debe agregarse que cualquier especulación que pudiera efectuarse sobre la subsistencia de los recargos dispuestos (artículo 59 C.F.) chocaría con la extinción que sobre los mismos produjo la Ley N° 14.890.

Que en relación con los restantes clientes informados en la Planilla de fs. 592/607, y respecto de los cuales se aprecia un incumplimiento total o parcial de la presentación de las declaraciones juradas y pagos del impuesto, corresponde mantener el ajuste por las percepciones del impuesto omitidas, confirmando en este sentido, los accesorios y recargos que se dispusieran por tales omisiones, lo que así también voto.

Por último y en cuanto a lo alegado con relación a las notas de crédito y el monto de las operaciones celebradas con monotributistas, entiendo que el Fisco no se apartó de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, procediendo conforme a derecho (conf. artículo 342 y cctes de la Disposición Normativa Serie "B" N° 1/2004 y modificatorias; Resolución Normativa N° 10/2008).

3) Finalmente, en lo que respecta al instituto de la responsabilidad solidaria, vinculado a quienes asumen la administración de la empresa, es importante destacar que resulta evidente que su fundamento es estrictamente recaudatorio. Las particularidades del aspecto subjetivo de la obligación tributaria, de la capacidad jurídica tributaria, generan la necesidad de contar con responsables por deuda ajena en orden a asegurar el efectivo ingreso de los tributos a las arcas Fiscales.

Y en el caso de dirigentes de sociedades comerciales habrá sin dudas, además, un

fundamento vinculado a la idea de compromiso social, a los principios de cooperación con la economía pública y el bienestar general. Sabida es la importancia que en la vida económica de cualquier nación tiene la organización empresarial, alcanzando en ese marco las sociedades comerciales, un protagonismo superlativo. Sin embargo, uno de los límites a los que sin duda alguna deberá someterse esa organización, es el interés público. Dirigir una empresa privada, supone algo más que el objetivo de lucro, en tanto toda empresa se encuentra involucrada con la comunidad donde se desarrolla y tiene sus responsabilidades y deberes con la misma. Este “plus”, endilgable a los objetivos empresarios, no tiene que ver con actividades filantrópicas, ni con desvíos en el objetivo primordial de cualquier explotación comercial, ni con abusos a las libertades individuales, sino con el mero cumplimiento de la ley. Por su parte, el accionar de toda empresa deviene de las voluntades de sus directores, o a quienes estos hayan delegado determinadas funciones; y cuando producto de aquellas voluntades, se produce un incumplimiento a sus obligaciones legales, es de clara justicia que quienes decidieron ese incumplir, respondan personalmente por sus consecuencias, de ser ello necesario.

Tal razonamiento deviene muy actual, a la luz de la enorme cantidad de maniobras descubiertas en relación a los denominados “paraísos fiscales”, supuestos en los que parecen no llegar ni la administración tributaria ni la justicia.

Es así que, en concordancia con la autonomía del derecho tributario (extremo reconocido por todos los Altos Tribunales en nuestro país, pero prácticamente sin aplicación en el orden provincial), las reglas de la responsabilidad solidaria tributaria, no deben buscarse en otras fuentes que no sean las propias. La naturaleza del instituto no debe entenderse desde una visión civilista (que lo relaciona a la fianza) ni penalista (que lo interpreta como de naturaleza represiva). Mal haríamos en reconocer analogías estructurales inexistentes. Entiendo que no podrá analizarse correctamente este instituto, si perdemos de vista que su marco es la TEORIA GENERAL DEL HECHO IMPONIBLE y no la TEORIA GENERAL DEL DELITO. Lo contrario implicará, además, desconocer o dejar vacía de contenido la tan mentada AUTONOMIA DEL DERECHO TRIBUTARIO (EXPRESAMENTE receptada por los Altos Tribunales nacionales e internacionales).

No estamos juzgando aquí acciones u omisiones típicamente antijurídicas y culpables, sino la responsabilidad por deuda ajena de quien decide los destinos de la empresa que dirige EN MATERIA TRIBUTARIA. Pero paralelamente, no deberá perderse de vista que el elemento subjetivo se encuentra ínsito en la solidaridad. Ella, solo puede explicarse por el vínculo jurídico, legal o convencional, constituido por la administración de la sociedad, elemento apreciado expresamente por el legislador, amén de las causales eximentes por él dispuestas.

Que esa función de administración de los bienes del contribuyente durante los períodos determinados en autos, no ha sido discutida por la apelante, extremo además acreditado en autos con toda la documentación societaria aportada. Merece agregarse que el artículo 24 del Código Fiscal en su tercer párrafo establece: *“...Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes”*.

Además, merece acentuarse que dichos responsables solidarios no son deudores “subsidiarios” del incumplimiento del contribuyente, sino que el Fisco puede demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera conjunta. El responsable tributario tiene una relación directa y a título propio con el sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de éste. Por todo ello, del análisis de los artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal, cabe concluir que surge correctamente endilgada la solidaridad tributaria al Sr. Héctor M. Di Doménico, en su carácter de presidente de la empresa, tal como surge de las Actas de Directorio obrante a fojas 347/348.

No pierdo de vista, sin embargo, a la luz del planteo efectuado por la apelante, que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia tuvo oportunidad de abordar la problemática vinculada a la constitucionalidad del sistema de responsabilidad solidaria trazado hace 25 años por el Código Fiscal (En autos “Toledo, Juan Antonio contra A.R.B.A. Incidente de revisión”, Sentencia del 30 de agosto del 2021 y en autos “Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Insaurralde, Miguel Eugenio y ot. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (A. 71.078) y “Casón, Sebastián Enrique c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (A. 72.776), ambos del 31 de agosto de 2021), declarando por mayoría la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los citados artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal.

Tal extremo configuraría la hipótesis habilitante para que este Tribunal ejerza la facultad que le confiere el artículo 12 del mismo Código (*“Los órganos administrativos no serán competentes para declarar la inconstitucionalidad de normas tributarias pudiendo no obstante, el Tribunal Fiscal, aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Suprema Corte de Justicia de la Provincia que haya declarado la inconstitucionalidad de dichas normas”*). El subrayado me pertenece). Haciendo mérito de ello y atendiendo a los fundamentos del Alto Tribunal vinculados principalmente a la sobreviniente irrazonabilidad del antiguo sistema legal (ello en comparación con el diseñado por el Legislador nacional para la Ley N° 11.683, principalmente con reformas introducidas en diciembre de 2017 por la Ley N° 27430), me llevan a rechazar esta nueva doctrina, considerándola inaplicable al caso de autos, donde se evidencia de manera palmaria

el aspecto subjetivo en los términos planteados por la propia Suprema Corte.

Para ello, no hace falta más que releer el contenido del recurso de apelación en tratamiento como asimismo el descargo oportunamente presentado por derecho propio alegando con total conocimiento de causa por qué no se practicaron las percepciones reclamadas (como clara decisión empresaria de no actuar en el carácter legalmente obligado, ensayando distintas explicaciones y fundamentos de naturaleza jurídica, contable y de política y administración tributarias) e invocando la ausencia de perjuicio fiscal, dando cuenta exacta de haber decidido el obrar tributario de la sociedad que administraba en el periodo objeto de autos.

De manera alguna puedo entender, en consecuencia, que no se acredita en el caso la subjetividad exigida por nuestro Alto Tribunal, la que por otra parte, como expresara, se encuentra ínsita en el concepto de solidaridad tributaria, correspondiendo en consecuencia confirmar la atribuida en autos al Sr. Héctor M. Di Doménico, en su calidad de presidente, único administrador de la empresa de marras.

En cuanto a la pretendida subsidiariedad, argumento también valorado por la particular mayoría de nuestro Alto Tribunal provincial en los antecedentes citados, luego de tres intimaciones de pago a la sociedad (vista de diferencias, disposición de inicio y disposición determinativa) y más de una década de tramitación del expediente, aparece como por demás cumplido el requisito de previa intimación de pago a la sociedad de hecho, aunque podrá reiterarse la manda pretoriana al momento de realizarse la intimación final en autos (artículo 92, inciso b) del Código Fiscal), lo que así declaro.

Por el contrario, en materia sancionatoria (artículo 63 del Código Fiscal), asumiendo como propios los argumentos expuestos en los antecedentes citados para declarar esta norma inoponible en el caso evaluado, al atentarse con el principio de la personalidad de la pena, analizando aquí sí la cuestión, en el contexto penal correspondiente. Se encuentra unánimemente receptado por la doctrina y jurisprudencia en la materia, que las infracciones tributarias y su régimen sancionatorio tienen naturaleza penal. Así lo ha planteado desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 183:216, de fecha 19/09/36), y sostenido férreamente desde el año 1968 (autos "Parafina del Plata S.A.", fallado el 02/09/68, publicado en L.L. 133-449) hasta la actualidad, teniendo una jurisprudencia invariable en lo concerniente a la naturaleza jurídica penal de los ilícitos tributarios y, en consecuencia, entendiendo procedente la aplicación a dichas infracciones de los principios que rigen el derecho penal, sobre todo aquellos de raigambre Constitucional.

POR ELLO, VOTO: 1º) Hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto a fs. 2/25 del Alcance Nº 2 que corre agregado como fojas 540, por el Dr. Emilio Sarmiento en carácter de apoderado y patrocinante de la firma "FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A." y por el Sr. Héctor Miguel Di Doménico por su propio derecho, con el patrocinio del citado profesional, contra la Disposición Delegada SEFSC Nº 5330, dictada por la Gerencia de Operaciones Area Interior de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 15 de diciembre de 2014. 2º) Ordenar a la citada Agencia que practique nueva liquidación, conforme los fundamentos expuestos en el Considerando III, punto 2) de la presente. 3º) Dejar sin efecto la solidaridad atribuida por el artículo 8º del acto apelado, solo respecto del pago de las sanciones aplicadas en sus artículos 4º y 6º. 4º) Confirmar los restantes términos del acto impugnado, debiéndose aplicar la multa y los recargos sobre las resultas de la liquidación ordenada.

VOTO DEL CR. RODOLFO DÁMASO CRESPI: Que, tal como ha quedado delineada la controversia en esta instancia, corresponde establecer si –a partir de los agravios incoados por la parte apelante– Disposición Delegada SEFSC Nº 5330/14, se ajusta a derecho.

Así, debo señalar en primer término que comparto el rechazo resuelto por mi colega preopinante, respecto de la prescripción planteada por la apelante contra la vigencia de las facultades determinativas de la Autoridad de Aplicación (punto 1 del voto de la Instrucción).

En este sentido, destaco que, en mi voto para la causa "Total Austral S.A. Sucursal Argentina" (Sentencia de Sala III de fecha 15 de diciembre de 2020, Registro Nº 4217; a cuyas consideraciones remito en honor a la brevedad), he tenido oportunidad de pronunciarme en torno al régimen jurídico aplicable al caso y la limitación de las potestades locales a la hora de regular la prescripción liberatoria en materia fiscal, a la luz de la denominada "Cláusula de los Códigos" (Conf. Art. 75, Inc. 12, de la Constitución Nacional).

Conforme ello, y teniendo en consideración que, en casos como los de autos (determinación de oficio de las obligaciones fiscales de un agente de recaudación, por el período 2009) corresponde aplicar el plazo decenal de prescripción contemplado en el artículo 4023 del Código Civil (y no el quinquenal previsto en el artículo 4027 Inc. 3 de dicho código; Ley Nº 340), computado desde el vencimiento previsto para la presentación de las declaraciones juradas vinculadas a cada una de las posiciones fiscales determinadas (esto es, enero a diciembre de dicho año), debe rechazarse el planteo formulado, toda vez que la Disposición Delegada SEFSC Nº 5330/14 fue notificada el 17 de diciembre del año 2014 (conforme surge de la constancia agregada a fojas 537). Esto es, en tiempo oportuno; lo que así declaro.

Establecido lo que antecede, debo señalar que, asimismo, adhiero al criterio propiciado por el Vocal instructor, en relación con las cuestiones de fondo controvertidas en autos (punto 2 de su voto), remitiendo a sus consideraciones a efectos de evitar reiteraciones innecesarias. Ello, sin perjuicio de efectuar –a mayor abundamiento– las siguientes consideraciones especiales, vinculadas a la confirmación parcial de la multa por omisión aplicada por el Fisco, con fundamento en lo dispuesto por el Art. 61, segundo párrafo, del Código Fiscal.

Frente a dicha infracción, destaco en primer lugar que la existencia de diferencias subsistentes en el marco de la determinación practicada por la Autoridad de Aplicación impone como consecuencia la configuración de una acción típicamente antijurídica, encuadrable legalmente bajo el citado artículo.

A su vez, con respecto al elemento subjetivo propio de la infracción en imputada, este Tribunal se ha expedido en innumerables sentencias, afirmando que la figura imputada exige un mínimo de subjetividad, o sea, la culpa en sentido estricto, desde que admite como causal exculpatoria el error excusable. Sin embargo, frente a esta exigencia de responsabilidad, no se ha invocado –y mucho menos acreditado– ninguna causal que la torne procedente; máxime, a poco que se repare en que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha destacado que *“La existencia de un error excusable requiere un comportamiento normal, razonable, prudente y adecuado a la situación, hallándose exento de pena quien demuestre que pese a su diligencia y en razón de graves y atendibles circunstancias que acompañaron o precedieron a la infracción, pudo y debió creer razonablemente que su acción no lesionaría el precepto legal ni el interés del erario (causa B. 48.268, 'Ciba Geig.', 5-11-81)”* (SCJBA *in re* “Buratovich Hanos. S.A.”, Sentencia de fecha 13 de abril de 1981).

De conformidad con lo expuesto, corresponde rechazar los agravios analizados y confirmar la sanción aplicada, con el alcance expuesto en el voto de la Instrucción; lo que así declaro

Finalmente, en relación con los agravios incoados contra la responsabilidad solidaria e ilimitada extendida en autos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal vigente (punto 3 del voto del Vocal instructor), advierto que, dado el tenor de los mismos, resulta aplicable al caso -en los términos previstos por los artículos 12 del referido código y 14 de la Ley N° 7604/70- la doctrina fijada por la SCJBA en autos “Toledo, Juan Antonio contra ARBA, incidente de revisión” (C. 121.754; Sent. del 30/08/2021), por la que declaró, por mayoría, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los citados artículos; criterio reiterado por dicho Tribunal en sendos fallos posteriores, “Fisco de la Pcia. de Bs.As. c/

Insaurralde, Miguel Eugenio y ot. s/ Apremio, Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley” (A. 71078) y “Casón, Sebastián Enrique c/Fisco de la Pcia. de Bs. As. s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley” (A. 72776), ambos del 31 de agosto de 2021.

Así lo sostuve en el precedente “Distribución Masiva S.A.” (Sentencia de Sala III de fecha 14/12/2021, Registro N° 4425), en cuyo voto no sólo aludí a los fundamentos de dicho fallo, sino también a la necesidad de evaluar los efectos prácticos de su aplicación desde la óptica del principio de “economía procesal”.

Destaqué entonces que el Máximo Tribunal hizo hincapié en que el sistema vigente carecía de razonabilidad al funcionar en su aplicación en clave objetiva (para hacer efectiva la extensión de la responsabilidad requiere únicamente que el Fisco acredite la representación legal o el ejercicio del cargo en el órgano de administración de la firma), como asimismo, al disponer que, de manera concomitante con el contribuyente, se efectúe el reclamo del pago de la deuda determinada, sus accesorios y las sanciones aplicadas. Es decir, que se caracteriza por la ausencia de los elementos esenciales en los que debe basarse el mismo; esto es, por un lado, el “subjetivo” -atribución de culpa o dolo brindando acceso a la defensa pertinente- y, por el otro, el carácter “subsidiario” del reclamo de pago de la obligación resultante -intimación de pago efectuada de manera previa al contribuyente y no satisfecha por parte del mismo-.

Consecuentemente, los magistrados que conformaron la mayoría del pronunciamiento citado, concluyeron que los artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal establecen una responsabilidad solidaria objetiva en la misma forma y oportunidad que rige para el contribuyente, al no admitir posibilidades razonables para su eximición o dispensa, todo lo cual vulnera diversos preceptos constitucionales (Arts. 1, 10, 11, 15 y 57 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As.; 1, 18, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

Acorde con ello, y remitiendo a mayor abundamiento a las consideraciones que expusiera en el precedente *ut supra* citado, corresponde hacer lugar al recurso incoado y dejar sin efecto la responsabilidad solidaria e ilimitada extendida al apelante; lo que así declaro.

POR ELLO, VOTO: **1)** Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Emilio Sarmiento, en carácter de apoderado y patrocinante de la firma “FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A.”, y por el Sr. Héctor Miguel Di Doménico, por su propio derecho, con el patrocinio letrado del citado profesional, contra la Disposición Delegada SEFSC N° 5330/14, dictada por la Gerencia de Operaciones Área Interior de la ARBA. **2)** Ordenar a la citada Agencia que practique una nueva liquidación,

conforme los fundamentos expuestos en el Considerando III, punto 2, del voto de la Instrucción. **3)** Dejar sin efecto la responsabilidad solidaria e ilimitada extendida al apelante. **4)** Confirmar en lo restante, y en cuanto ha sido materia de agravios, el acto impugnado, debiéndose aplicar la multa y los recargos correspondientes con el alcance expuesto en el voto de Vocal instructor.

VOTO DEL DR. JORGE SAVERIO MATINATA: Adhiero en lo sustancial al criterio resolutivo propuesto por el Vocal instructor. La única excepción se vincula a los fundamentos expuestos para dejar sin efecto la responsabilidad solidaria endilgada, desde el modelo legal de control difuso y del art. 280 del CPCCN en el caso SCBA y CSJN "*Toledo*", remitiéndome al voto expuesto en autos "Multibag SA", Registro 4630 de la Sala III, de fecha 22/08/23. Allí entendí a la responsabilidad solidaria como un elemento subjetivo del hecho imponible en la relación jurídica tributaria sustantiva y en el circuito económico, y como una carga pública personal establecida por ley bajo el marco legal de distribución territorial de competencias constitucionales tributarias (arts. 16 y 75 inc. 2° de la Constitución Nacional y art. 103 inc. 1° de la Constitución Provincial), donde además el procedimiento administrativo establece presunciones legales por incumplimientos a obligaciones de hacer y dar que resultan rebatibles mediante prueba en contrario, las que deben ser desvirtuadas por la contribuyente y responsables. Así lo dejo expresado.

POR ELLO, POR MAYORÍA, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto a fs. 2/25 del Alcance N° 2 que corre agregado como fojas 540, por el Dr. Emilio Sarmiento en carácter de apoderado y patrocinante de la firma "FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A." y por el Sr. Héctor Miguel Di Doménico por su propio derecho, con el patrocinio del citado profesional, contra la Disposición Delegada SEFSC N° 5330, dictada por la Gerencia de Operaciones Area Interior de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 15 de diciembre de 2014. 2°) Ordenar a la citada Agencia que practique nueva liquidación, conforme los fundamentos expuestos en el Considerando III, punto 2) de la presente. 3°) Dejar sin efecto la solidaridad atribuida por el artículo 8° del acto apelado, solo respecto del pago de las sanciones aplicadas en sus artículos 4° y 6°. 4°) Confirmar los restantes términos del acto impugnado, debiéndose aplicar la multa y los recargos sobre las resultas de la liquidación ordenada. Regístrese, notifíquese a las partes y al Fiscal de Estado y devuélvase a la citada Agencia, a los fines que estime corresponder.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

Providencia

Número:

Referencia: "FRIGORIFICO DE LA COSTA S.A." 2360-0356688/2011

Se deja constancia que la sentencia dictada bajo el GEDO INLEG-2024-08772806-GDEBA-TFA se ha registrado en esta Sala III bajo el N° 4694.